

Santiago, diecisiete de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, en causa RUC 1901089845-8, RIT 6-2021, por sentencia de 29 de septiembre de 2021, en procedimiento ordinario condenó a Johan Gonzalo Millanao Nahuelpi, como autor del delito de robo con intimidación, en grado de consumado, cometido en la comuna de Ercilla el día 8 de octubre del año 2019, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa. Se ordenó el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad impuesta, reconociéndole los abonos que indica.

La defensa del acusado dedujo recurso de nulidad contra dicha sentencia, el que fue admitido a tramitación, celebrándose la audiencia para su conocimiento el veintisiete de abril pasado, según da cuenta la respectiva acta agregada a estos autos.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso invoca en forma principal la causal de nulidad de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, denunciando que durante la tramitación del juicio se infringieron sustancialmente garantías aseguradas por la Constitución y los Tratados Internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, en particular el debido proceso, en el sentido de la garantía de un proceso previo legalmente tramitado, el deber de registro de las actuaciones de la investigación y el derecho a defensa, reprochando la vulneración de los artículos 19 n° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, el art. 14 N°3 letras a) y b) del Pacto Internacional de Derechos



Civiles y Políticos; el Art. 8º n° 5 y n°2 letra c) de la Convención Americana de Derechos Humanos y, los artículos 93 letra c), 180, 181, 227 y 228 del Código Procesal Penal.

Esgrime que para tener por acreditada la participación de don Johan Millanao Nahuelpi, en los hechos imputados por el Ministerio Público, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol se basó principalmente en la declaración de la víctima Michel Alexis Rodríguez Schifferli, así como en el reconocimiento que él practicó ante la Policía de Investigaciones y la sindicación que del acusado realizó durante la audiencia de juicio. Sin embargo, pone de relieve que dicha imputación fue precedida de otra de análoga naturaleza ante la SIP de Carabineros, de la cual la defensa solo tomó conocimiento durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral, toda vez que no fue consignada en la carpeta investigativa. Lo anterior, impidió a la defensa conocer las fotografías que le fueron exhibidas al ofendido y corroborar si dentro de estas imágenes se encontraba o no su representado, lo que resultaba relevante para establecer un eventual reconocimiento inducido, acorde a su teoría del caso.

Al concluir solicita que se anule el juicio oral y la sentencia condenatoria dictada, debiendo retrotraerse la causa al estado de celebrase una nueva audiencia de juicio oral por un tribunal no inhabilitado.

SEGUNDO: Que, en forma subsidiaria, invocando la misma causal, la defensa nuevamente denunció la vulneración del debido proceso y el derecho a defensa, por infracción al deber de registro de las actuaciones de la investigación, en relación a los artículos 93 letra c), 180, 181, 227 y 228 del Código Procesal Penal.



Explica que durante la sustanciación de la audiencia de juicio oral, el Ministerio Público presentó a declarar a tres policías para que dieran cuenta al Tribunal las actuaciones y diligencias que desarrollaron durante la investigación y su resultado. Sin embargo, reprocha que como aquellos deponentes no declararon durante la sustanciación de la misma, la defensa no contaba con los antecedentes suficientes y necesarios para realizar un contra examen efectivo.

Termina solicitando que se anule el juicio oral y la sentencia condenatoria dictada, ordenando que la causa se retrotraiga al estado de celebrase una nueva audiencia de juicio oral por un tribunal no inhabilitado.

TERCERO: Que, como segunda causal subsidiaria la defensa esgrimió la contemplada en el artículo 374 e) del Código Procesal Penal “*cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e)*”, denunciando que el Tribunal omite una exposición clara, lógica y completa de la valoración de los medios de prueba que fundamenten sus conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del cuerpo legal citado, en lo referido a la falta de registro de la diligencia de reconocimiento efectuada por la SIP de Carabineros de Victoria y los incumplimientos del Protocolo Interinstitucional de Reconocimiento de Imputados.

Afirma que el fallo no se hace cargo de las inconsistencias que existen en el resultado de los reconocimientos fotográficos, cuyas conclusiones resultan ser contradictorias con los asertos del ofendido quien no descartó que la fotografía del acusado hubiere estado entre las que le fueron exhibidas en la SIP de Carabineros. No obstante lo anterior, los sentenciadores establecen la participación de su representado con el testimonio y reconocimiento de la víctima, el cual carece de corroboración externa.



Finaliza solicitando la nulidad del juicio y la sentencia respecto del delito por el cual fue condenado su representado, debiendo determinarse por el tribunal *ad quem* el estado en que hubiere de quedar el procedimiento y ordenar la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que corresponda, para que éste disponga la realización de un nuevo juicio oral.

CUARTO: Que como tercera causal subsidiaria la defensa hizo valer la contemplada en el Art. 373 letra b), del Código Procesal Penal, esto es “cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”, vicio que hace consistir en la errada calificación de los hechos en el delito de robo con intimidación, no obstante que –según afirma- estos corresponden a un hurto. En efecto, destaca que el ofendido señaló que no se sintió intimidado y que ignora si el objeto que le fue colocado en la espalda se trataba de un cuchillo o cortaplumas, objeto que en todo caso no fue empleado por su representado.

Concluye solicitando que se anule únicamente la sentencia en aquella parte que condenó a Johan Gonzalo Millanao Nahuelpi, como autor del delito de robo con intimidación, previsto y sancionado en el artículo 436 del Código Penal, y sin nueva audiencia pero separadamente, se dicte sentencia de reemplazo que lo condene a la pena mínima como autor del delito de hurto previsto y sancionado en el artículo 446 del Código Penal, otorgándole la remisión condicional como pena sustitutiva.

QUINTO: Que de conformidad al artículo 359 del Código Procesal Penal, la recurrente rindió prueba de registro de audio en la audiencia celebrada ante esta Corte, consistente en la reproducción de pasajes de los testimonios prestados por la víctima Michel Rodríguez Schifferli, del funcionario



Christopher Alarcón y del perito Luis Díaz Bushnner quienes se refirieron a las diligencias que realizaron durante la investigación.

SEXTO: Que, como se advierte, tanto la causal principal, como la primera subsidiaria invocada por el recurso, denuncian la configuración de la hipótesis de nulidad fundada en el agravio a la garantía constitucional del debido proceso por no respetar que la decisión fuera fundada en prueba obtenida y producida de conformidad a la ley, vicios que hace consistir en la ausencia de registro en la carpeta investigativa de la exhibición de fotografías realizado por la SIP de Carabineros a la víctima Michel Alexis Rodríguez Schifferli y la omisión durante la investigación de la declaración de tres funcionarios policiales, lo que le habría impedido realizar un contra examen efectivo por falta de antecedentes, debilitando su estrategia de defensa y colocando al acusado en una posición de desigualdad frente al ente persecutor.

SÉPTIMO: Que en lo referente a la garantía del debido proceso, cuya transgresión fue denunciada, se trata de un derecho sobre el cual existe coincidencia en que es el resultado de una larga evolución histórica e incorporado en Chile mediante el texto de la Constitución de 1980, en la que los comisionados entendieron el debido proceso como un principio que comprendía múltiples otras garantías judiciales y consideraron favorablemente la posibilidad de que su consagración cumpliera una función integradora de los derechos fundamentales. Siguiendo esa línea, se prefirió un concepto cuyas precisiones pudieran ir evolucionando de acuerdo con el tiempo y ser recogidas y puntualizadas por la jurisprudencia. Con el ingreso al ordenamiento jurídico nacional de la Convención Americana de Derechos Humanos (publicada en el Diario Oficial el 05 de enero de 1991) y el Pacto Internacional de Derechos



Civiles y Políticos (publicado con fecha 29 de abril de 1989), se reunió un extenso catálogo de garantías judiciales, que aparecen enunciadas, como tales, en dichas convenciones, descritas con precisión y especificidad. La reforma procesal penal, a propósito del derecho a un debido proceso, convirtió en función central de la judicatura asegurar el respeto de los derechos fundamentales a través de diversos sistemas de control, preventivos y correctivos, inmersos en distintas normas del Código Procesal Penal. En esta realidad normativa, resulta evidente que se impone a los jueces la utilización de los principios constitucionales como estándares a los cuales debe enfrentarse ya no sólo la legislación, sino también la conducta de los agentes de la persecución penal e, incluso, de los propios jueces.

El mensaje del Código Procesal Penal sostiene que deben explicarse los principios básicos que rigen el enjuiciamiento criminal, especificando los contenidos de la Constitución Política y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en que el eje del procedimiento está constituido por la garantía del juicio previo. *“Otro de los principios generales del sistema propuesto consiste en la aplicación directa de las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos relevantes en cuanto a la regulación del procedimiento penal. Esta disposición obedece a la necesidad de reforzar la noción de que el procedimiento penal se organiza a partir del desarrollo de los principios generales del ordenamiento jurídico que regulan la relación entre el Estado y los ciudadanos y que se encuentran recogidos en esos cuerpos normativos. En este sentido, se trata de resaltar la importancia de estos principios por sobre los mecanismos procesales específicos consagrados en la ley. Los jueces deberán trabajar integrando las normas procedimentales con las de carácter constitucional e internacional, interpretando y aplicando las*



primeras de modo que den cumplimiento a las exigencias contenidas en las dos últimas.” (Historia de la Ley N° 19.696, mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal, Biblioteca del Congreso Nacional, págs. 18-19).

Acorde con lo señalado precedentemente, esta Corte ha sostenido consistentemente, en torno al debido proceso, que se trata de un derecho asegurado por la Constitución Política de la República que ordena que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y al efecto el artículo 19, N° 3°, inciso sexto, le confiere al legislador la misión de definir las condiciones de un procedimiento racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal salvaguardia supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de resguardos que la Carta Fundamental, los tratados internacionales ratificados por Chile en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura, a vía de ejemplo, que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan impugnar las resoluciones con las que no estén conformes, en su caso que se respeten los procedimientos fijados en la ley con fidelidad a la Constitución y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas (SCS N° 6902-2012, de 6 de noviembre de 2012, N° 2747-13, de 24 de junio de 2013, N° 6250-2014, de 7 de mayo de 2014, N° 4269-19, de 25 de marzo de 2019, y N° 92059-20, de 8 de septiembre de 2020, entre otras).

OCTAVO: Que, en el mismo sentido, esta Corte también ha resuelto uniformemente que el agravio a la garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso.



Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento. (SCS Roles N° 2866-2013, N° 4909-2013, N° 21408-2014, N° 4269-19, N° 76689-20 y N° 92059-20)

NOVENO: Que, para un adecuado entendimiento de lo que debe resolverse es conveniente recordar los hechos que el Tribunal Oral en lo Penal tuvo por establecidos. Estos son los siguientes: “El día 8 de octubre del año 2018, en horas de la tarde, Michel Alexis Rodríguez Schefferli transitaba en su bicicleta por un camino rural de la localidad de Pailahueque de la comuna de Ercilla, cuando fue interceptado por Johan Gonzalo Millanao Nahuelpi y otro individuo, que se encontraban en compañía de otros dos individuos, procediendo Millanao Nahuelpi a retener a la víctima tomando la bicicleta de la víctima por el manubrio de esta, mientras la otra persona colocó un elemento corto punzante en el costado de la espalda de la víctima, y se apropiaron de diversas especies, consistentes en el casco de ciclismo marca Bell, unos lentes de sol marca Oakley, un pulsómetro Garmin, audífonos y la bicicleta marca Orbea, especies valuadas en la suma de \$4.570.000 por el afectado. Johan Gonzalo Millanao Nahuelpi y los otros tres sujetos se transportaban en el vehículo marca Suzuki Grand Nómade placa patente DPKS-25”.

Estos hechos fueron calificados por el Tribunal como un delito de robo con intimidación, en grado de consumado.



DÉCIMO: Que, en relación a los puntos abordados en el recurso, el fallo señaló que “la víctima al declarar ante estos jueces indicó directamente al acusado Johan Gonzalo Millanao Nahuelpi presente en la sala de audiencia, como la persona que tomó su bicicleta por el manubrio, asegurándolo porque lo tuvo a medio metro de distancia y por eso reconocía su cara; a lo que se suma que la víctima declaró que cuando se iba del lugar de los hechos miró hacia atrás y pudo ver tres letras de la patente del vehículo en que se movilizaban los individuos, las letras DPK señaló el detective Alarcón Molina cuando la defensa del acusado le preguntó cuáles eran las letras de la patente que se habían indicado en el parte denuncia, encontrándose a unos siete metros de distancia, distancia a la cual resulta fácilmente distinguible las composición de letras y números de una patente, y que este correspondía a un Suzuki Vitara, conforme señaló al momento de presentar su denuncia y luego rectificó señalando que era un Suzuki Grand Nómade”.

Producto de lo anterior, los jueces estimaron que no “resulta relevante que la víctima hubiese manifestado en el contrainterrogatorio que cuando declaró ante el funcionario de la SIP de Carabineros se le exhibieron fotografías y de ello no se dejó constancia en las actuaciones policiales y en la carpeta de investigación, pues la propia víctima manifestó que en dichas fotografías no reconoció a nadie y de sus dichos no es posible sostener que dentro de las fotografías que se le exhibieron en esta oportunidad hubiese estado la fotografía del acusado y/o del otro participante del hecho ilícito, y ello lo haya inducido en el reconocimiento que hizo en la diligencia efectuada en la Policía de Investigaciones, por lo que no se advierte perjuicio para la defensa esta falta de registro que denunció en sus alegaciones de participación”.



Acto seguido los sentenciadores concluyeron que “la identificación del acusado como participante del delito se funda en la declaración directa que prestó ante estos jueces la víctima Rodríguez Schifferli, la cual impresionó como certera y clara, sin lugar a dudar de ella, habiendo sido sometido a interrogatorio y contrainterrogatorio, de lo cual no se desprendieron reproches que se le puedan hacer para restarle credibilidad, y considerando que el resto de la prueba de cargo presentada en juicio, de una manera clara y lógica explica cómo se llegó a la identificación del acusado en la etapa de investigación, con un antecedente objetivo que es la identificación del vehículo que hace la víctima por sí mismo, primero al ocurrir el hecho y entregar parte de las letras de la patente al denunciar el hecho, y luego en forma casual al encontrarlo transitando por la vía pública en la comuna de Victoria, por lo que no hay antecedentes, aun en forma indiciaria, que lleven a que esta atribución de participación que hizo al declarar en el juicio hubiese estado inducida por precedentes que generen duda acerca de la fiabilidad de la identificación”.

UNDÉCIMO: Que, atendido lo razonado por los sentenciadores y que fue explicitado precedentemente, los cuestionamientos formulados por la defensa referidos a su desconocimiento –producto de la falta de registro- de la exhibición fotográfica realizada por la SIP de Carabineros a la víctima y la ausencia de declaración durante la investigación de tres funcionarios policiales, resultan infundados. En primer lugar, porque el ofendido concurrió al juicio oral para dar cuenta de las diligencias en las que participó, las características de los partícipes del delito de que fue objeto y como se logró su individualización, de suerte que aunque no se consignó aquella diligencia ni los tres funcionarios policiales declararon formalmente durante la investigación, para la defensa no



eran desconocidos el objeto de sus testimonios, lo que descarta cualquier posibilidad de sorpresa en sus relatos.

Por otra parte, la prueba rendida por la recurrente ante esta Corte de conformidad al artículo 359 del Código Procesal Penal, no aportó indicio alguno que acreditase que los posteriores reconocimientos realizados por la víctima – mediante el kárdex fotográfico y en el juicio oral- puedan considerarse inducidos, ni tampoco lo estimó así el tribunal de la instancia, por lo que afirmar lo contrario vulnera los principios de inmediación, oralidad y bilateralidad de la audiencia que se garantizan en el juicio oral.

A mayor abundamiento, las impugnaciones que se formulan por los presentes capítulos devienen en una excesiva formalidad al pretender asilarse tanto en la obligación del órgano persecutor de consignar diligencias que resultaron inconducentes –según se estableció en el fallo impugnado- como tomar declaración a todo testigo que pretenda presentar en juicio, siendo la falta de aquellos presuntos deberes una afectación al debido proceso en su vertiente del derecho a defensa. Tal razonamiento resulta incompatible con la autonomía y desformalización con que los fiscales del Ministerio Público ejercen su labor en los casos que tienen a su cargo, según predicen los artículos 2° y 6° de la Ley 19.640. A su turno, para que la falta de registro de un determinado testimonio y/o diligencia pueda ser considerada una infracción de garantías es deber del impugnante demostrar cómo tales carencias afectaron en forma concreta y sustancial el correcto derecho a defensa, lo que debe traducirse en una efectiva sorpresa que impidió elaborar una adecuada estrategia de defensa o el riguroso contraste de los testimonios en el juicio ocasionando un trascendente perjuicio al recurrente, cuestión que en autos no es posible apreciar, dada la circunstancia de que al llevarse a cabo la audiencia



preparatoria la defensa contaba con copia de la carpeta investigativa en la que aparecían los restantes antecedentes apreciados por el Tribunal, que fluían de la sola vista de las piezas de la investigación, lo que permitía a la defensa desplegar de manera cabal su fundamental labor de control y preparar adecuadamente su estrategia.

Por tal razón, no es posible sostener que en la especie se haya privado a la defensa de algún derecho, considerando que la exhibición fotográfica cuya omisión de registro reclama, ninguna transcendencia tuvo y que bien pudo preparar el contrainterrogatorio respecto de los declarantes que no le eran desconocidos, aún a falta de un registro formal de sus testimonios en la carpeta investigativa.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, si bien lo anterior basta para desestimar el recurso, a mayor abundamiento cabe tener presente que tal como se desprende del considerando décimo, la víctima al declarar en estrados indicó directamente al acusado Johan Gonzalo Millanao Nahuelpi presente en la sala de audiencia, como la persona que tomó su bicicleta por el manubrio, dando razón de sus dichos, lo que guardó armonía con la información que proporcionó respecto del vehículo que se encontraba en el lugar, antecedentes que también fueron proporcionados ante los funcionarios de Investigaciones que tomaron el procedimiento por instrucciones del Ministerio Público.

En efecto, los sentenciadores tuvieron por establecido el hecho punible y la participación del acusado, con la prueba de cargo aportada por el Ministerio Público, la cual superó el estándar de convicción del artículo 340 del Código Procesal Penal, despejando cualquier duda razonable, la cual además desacreditó por las razones explicitadas en el referido considerando, la teoría alternativa planteada por la defensa.



En efecto, la sentencia analizó las evidencias incriminatorias con las cuales tuvieron por justificados los hechos contenidos en la acusación, aplicando el mandato contenido en el inciso 2º del artículo 340 del Código Procesal Penal, que obliga al tribunal a formarse convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral.

DÉCIMO TERCERO: Que, por todas las razones explicitadas se desestimarán la causal principal y primera subsidiaria invocada por la defensa.

DÉCIMO CUARTO: Que en lo tocante al segundo motivo subsidiario del arbitrio impetrado a través de la proposición de la causal de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en armonía con el artículo 342 letra c) del mismo cuerpo de leyes, cabe reiterar que ella se refiere a la omisión, en la sentencia, de alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, indicando que ello ocurre en relación a los elementos que la letra c) de esta última disposición ordena observar, esto es: *“La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y la valoración de los medios de prueba que fundamentare dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”*. A su vez, esta última norma prescribe *“Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiese desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por*



probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”.

En relación a esta causal la defensa reprocha la infracción al principio lógico de la razón suficiente, al desestimar la relevancia de la ausencia de registro de la exhibición fotográfica practicada por la SIP de Carabineros.

Respecto de lo anterior, debe aclararse que la señalada omisión o ausencia no es tal, lo que se deduce de la sola lectura del fallo impugnado y de los razonamientos que anteceden, de los que queda de manifiesto que la molestia real del recurrente está circunscrita a la valoración efectuada por el tribunal, la que no comparte. En efecto, lo anterior se aprecia del fundamento décimo donde el fallo reproduce los motivos que se tuvieron en consideración para llegar a las conclusiones que allí mismo se consigan.

Es más, -como ya se dijo- los sentenciadores afirmaron que “no se desprendieron reproches que se le puedan hacer para restarle credibilidad, y considerando que el resto de la prueba de cargo presentada en juicio, de una manera clara y lógica explica cómo se llegó a la identificación del acusado en la etapa de investigación [...]”, para luego concluir que “no hay antecedentes, aun en forma indiciaria, que lleven a que esta atribución de participación que hizo al declarar en el juicio hubiese estado inducida por precedentes que generen duda acerca de la fiabilidad de la identificación”, descartando además las alegaciones de la defensa fundadas en los dichos del perito criminalista Díaz Bushnner, -que fueron parcialmente reproducidos en la audiencia de conocimiento de este recurso- que refieren que las diligencias investigativas estuvieron mal efectuadas o que se debieron efectuar para tener una prueba objetiva en contra del acusado, lo que según afirmó el fallo impugnado “no



restan veracidad y credibilidad a los dichos de la víctima, cuya declaración ante el Tribunal es el elemento probatorio principal que se conoció por esos jueces para dar por acreditado la existencia del hecho delictual y la participación del enjuiciado en los mismos”, siendo plenamente aplicable a este efecto la regla general sobre libertad de prueba de los artículos 295 y 297 del Código Procesal Penal (DUCE, Mauricio y RIEGO, Cristian, *Proceso Penal*, Ed. Jurídica de Chile, primera edición, año 2007, p. 470)”.

DÉCIMO QUINTO: Que, pareciera pertinente recordar que en un recurso como el de la especie, no ha sido dada a esta Corte la facultad de realizar una nueva ponderación de los elementos de prueba vertidos en el juicio oral, puesto que ello atenta contra el principio de inmediación y supera los límites de la nulidad. Por el contrario, la argumentación del impugnante se dirige en este sentido, por cuanto cuestiona la prueba producida por el ente persecutor, mediante el análisis de pasajes aislados, sin atacar -como supone la causal de nulidad en examen- el razonamiento del fallo que plasma el análisis global de la prueba rendida, en cuanto éste debe ajustarse a las reglas de la sana crítica, respetando las máximas de la experiencia, los principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados.

Por ello, la circunstancia de no compartir el recurrente las conclusiones del tribunal en cuanto a la fundamentación, es decir, la valoración de la prueba producida, no supone automáticamente su impugnación por esta vía, en donde se ha denunciado la transgresión al principio de la razón suficiente, extremo que no concurre pues quedó demostrado que las pruebas y cuestionamientos formulados en torno a ella fueron efectivamente considerados y valorados, sin contradecir aquellos parámetros.



DÉCIMO SEXTO: Que, por las mismas razones explicitadas precedentemente, será desestimada la tercera causal subsidiaria invocada por la defensa, que denuncia una errónea aplicación del derecho, al estimar -luego de reproducir parcialmente el testimonio de la víctima- que los hechos establecidos por el tribunal configuran el delito de hurto y no robo con intimidación, toda vez que lo que hace el recurrente, a la postre, es discutir la apreciación de la prueba efectuada en la sentencia. En efecto, los fundamentos esenciales de este acápite, dicen relación con el alcance y sentido que corresponde conferir a la prueba rendida. Sin embargo, tal actividad se agotó con la determinación que a ese respecto hicieron los jueces del fondo, quienes tras analizar los antecedentes y en uso de sus facultades privativas, concluyeron que se trataba de un delito de robo con intimidación. Y, como se anticipó, en la medida que la recurrente sugiere algo distinto de lo asentado por los sentenciadores, contraría cuestiones inamovibles en el fallo que impugna.

DECIMO SÉPTIMO: Que, por las consideraciones precedentes la nulidad impetrada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de acuerdo también a lo establecido en los artículos 372, 373 letra a), b) y e) 376 y 385 del Código Procesal Penal se rechaza el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno y el juicio oral que le antecedió, dictada en los antecedentes RUC N° 1901089845-8, RIT 6-2021, del Tribunal Oral en lo Penal de Angol, los que en consecuencia, **no son nulos**.

Se previene que el Ministro señor Llanos concurre al rechazo del recurso, pero no comparte los razonamientos expresados en los párrafos tercero y cuarto del considerando undécimo, teniendo para ello presente:



1°) Que la defensa denunció en su libelo que dos actuaciones investigativas -que a su vez sirvieron de antecedentes de probanzas producidas en el juicio oral- no fueron registradas en la carpeta respectiva del Ministerio Público, como lo exigen los Arts. 227 y 228 del Código procesal Penal; lo cual atentó contra su derecho de defensa y, por ende, al derecho constitucional a ser juzgado en un debido proceso, por haber ignorado su parte la existencia de dichas probanzas con antelación al juicio, impidiendo de esta forma preparar los instrumentos procesales para contrarrestarlas;

2°) Que el Art. 227 del Código citado establece:

“Registro de las actuaciones del ministerio público. El ministerio público deberá dejar constancia de las actuaciones que realizare, tan pronto tuvieron lugar, utilizando al efecto cualquier medio que permitiere garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como el acceso a la misma de aquellos que de acuerdo a la ley tuvieron derecho a exigirlo.

La constancia de cada actuación deberá consignar a lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar de realización, de los funcionarios y demás personas que hubieren intervenido y una breve relación de sus resultados.”

A su turno, el Art. 228 del mismo cuerpo legal preceptúa:

“Registro de las actuaciones policiales. La policía levantará un registro, en el que dejará constancia inmediata de las diligencias practicadas, con expresión del día, hora y lugar en que se hubieren realizado y de cualquier circunstancia que pudiere resultar de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el registro de las instrucciones recibidas del fiscal y del juez.

El registro será firmado por el funcionario a cargo de la investigación y, en lo posible, por las personas que hubieren intervenido en los actos o proporcionado alguna información.



En todo caso, estos registros no podrán reemplazar las declaraciones de la policía en el juicio oral.”;

3°) Que las disposiciones anteriores no constituyen una mera formalidad de la investigación penal, y su establecimiento no es, por tanto, gratuito. Tienen por finalidad otorgar a la defensa del imputado el conocimiento previo de las actuaciones investigativas para que, conociendo cabalmente los antecedentes que lo incriminan, pueda preparar sus herramientas de defensa y eventualmente hacer uso del derecho de dar lectura a declaraciones previas del acusado o testigos para apoyo de memoria, previsto este último en el Art. 332 del estatuto procesal del ramo. Asimismo, permiten hacer efectivo el derecho del imputado a solicitar el contenido de la investigación (Art. 93 letra g) de dicho estatuto), disposición que apunta en el mismo sentido antes señalado;

4°) Que las normas legales anteriores consagran en el derecho nacional reglas de debido proceso previstas en instrumentos internacionales. En el punto particular que nos ocupa, el Art.8 N° 2 letra c) de la Convención Americana de Derechos Humanos estatuye como derecho la *“concesión al inculcado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa”*.

Lo anterior se enmarca dentro del principio inherente a todos juicio denominado “igualdad de armas”, esto es, que tanto el acusador como el acusado gocen de iguales derechos y posibilidades, “el equilibrio prudente entre las razones de las partes dando igual oportunidad a ellas para demostrar sus convicciones” (Osvaldo Gozaíni, “Teoría General del Procesal Penal”, pag.101. Ed. Ediar, Bs. Aires, 1966);

5°) Que conforme a lo dicho, la infracción al deber de registro constituye, entonces, una vulneración no solo de disposiciones procesales, sino que atenta



contra un derecho de carácter constitucional, como lo es el debido proceso. Sin embargo, para que tal atentado configure la causal de nulidad del juicio y de la sentencia que establece el Art. 373 letra a) del Código Procesal Penal, es menester que afecte “sustancialmente” tal derecho o garantía, esto es, que ataque el núcleo central del derecho no solo impidiendo su ejercicio, sino además que trascienda de un modo tal que la decisión condenatoria a que arribe el tribunal se provoque por la situación desventajosa en que quedó la defensa. Ello, en atención a que el Art. 375 del ya referido código establece como requisito para acoger el recurso, precisamente, que los errores de la sentencia impugnada sean esenciales por tener influencia en su parte dispositiva (“principio de trascendencia”), lo cual no aconteció en la especie. En efecto, aun prescindiendo de las diligencias no registradas (exhibición de un set fotográfico por la policía a la víctima –que no tuvo resultados- y testimonios de Carabineros que declararon en el juicio), lo que resultó fundamental para arribar al veredicto condenatorio fue el reconocimiento que la víctima efectuó del imputado en la audiencia de juicio, como se asentó en el fallo recurrido.

6°) Que finalmente, es útil consignar que el aludido principio de trascendencia a que se refiere la norma precitada solo cobra importancia en relación con la causal de nulidad que aquí se analiza, toda vez que en el caso de los motivos absolutos de nulidad, si concurren, “el juicio y la sentencia serán siempre anulados”; y en el caso de la causal de errónea aplicación del derecho, la propia descripción de la misma exige que aquella “hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”.

Regístrese y devuélvase

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Letelier y la prevención de su autor.



Rol N° 79947-21.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., y el Abogado Integrante Sr. Ricardo Abuaud D. No firma el Abogado Integrante Sr. Abuaud, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.



En Santiago, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

